

rias, y por lo mismo los Ciudadanos estaban en el absoluto y pleno goce de las garantías consignadas en el Código fundamental de la República Mexicana; atendiendo á las consideraciones legales de que hacen mérito el representante del Ministerio público en su respuesta y el Abogado del quejoso en su alegato, debía declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Nestor Martínez, contra el acto que motivó éste recurso. Notifíquese la sentencia, y publicada en los Periódicos Diario Oficial y Semanario Judicial, dése cuenta con las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. El C. Juez lo mandó y firmó. Doy fé.—*José A. Bucheli.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno.*

#### *Resolución de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 10 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 15 de Febrero último promovió ante el Juez 1º de Distrito de México, Nestor Martínez, contra la determinación de la Comandancia Militar de esta plaza que en 8 de Mayo del año próximo pasado le consignó al servicio de las armas en la Brigada de artillería, violando en su persona la garantía que concede el artículo 5º de la Constitución federal.—Vistas las constancias de autos y atendida la sentencia del Juez de Distrito que concede al quejoso el amparo pedido, en virtud de haber justificado la legalidad de su queja, pues aparece de esas mismas constancias, que aquella consignación se verificó en la expresada fecha del día 8 de Mayo, es decir, cuando había concluido la suspensión de las garantías individuales, y en este concepto, que el promovente gozaba plenamente la que otorga el artículo 5º de la Constitución federal, y en consecuencia, retener hoy al quejoso en la prestación obligatoria

del servicio militar, importa la violación en su persona de la garantía que reclama.—Por estos fundamentos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Se confirma la sentencia que en 9 de Abril último, pronunció en la Ciudad de México el Juez 1º de Distrito declarando, que la Justicia de la Union ampara y protege á Nestor Martínez contra el acto de la Comandancia Militar que lo retiene sin su consentimiento en la 1ª Brigada de artillería.—Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan José de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*M. Anza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 13 de Mayo de 1873.—*Lic Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Miguel Careaga, socio y gerente de la casa Careaga y Cª del comercio de Mazatlan, contra el Administrador de la Aduana Marítima de ese puerto, que dispuso embargar dicha casa, por el pago de derechos de importación de varios efectos.*

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice:—Como este juicio de amparo es enteramente inane, al

que se ventila en ese mismo Juzgado por los Sres. J. de la Quintana, en el que tengo ya emitido mi parecer, creo de mi deber reproducirlo para obrar en consecuencia: dice así: (aquí incerta el pedimento en el juicio de amparo de los Sres. J. de la Quintana y C<sup>as</sup>) concluye.—Así espicio que ese juzgado se sirva determinarlo, con relacion al presente asunto.

Mazatlan, Enero 11 de 1873.—*L. Gao-  
na.* Una fábrica.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Mazatlan, Enero 14 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Miguel Careaga, como socio de la casa Careaga y C<sup>as</sup>, contra la providencia dada y mandada ejecutar por el C. Administrador de la Aduana Marítima, por la que en uso de la facultad económico-coactiva, exige á dicha casa la cantidad de ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos diez centavos, valor total de los derechos de importacion que causaron los efectos descargados del Bergantin Goleta Norte aleman "*Wiltelmine*," alegando el quejoso que con tal providencia se viola la garantía que el artículo 16 de la Constitucion general otorga á todo habitante de la República, y que por no haberse accedido á la peticion que hizo para que se le diera copia del mandamiento de ejecucion y de los recados en que aquel se apoya, se violó la parte final del artículo 89 de la misma Constitucion. Visto tambien la solicitud hecha sobre la suspension de la citada providencia; lo resuelto en ella; los documentos presentados por el quejoso, y lo pedido por el Señor Fiscal con todo lo mas que ver convino.

Considerando: que aunque el Señor Careaga alega no tener derecho el fisco para exigirle por medio de la facultad económico-coactiva, la cantidad que reclama, por las escepciones que cree le favorecen, no por esto desconoce la accion que aquel tiene pa-

ra el cobro que promueve, y solo manifiesta, que tal accion debe deducirse ante los Tribunales, por considerar al Administrador autoridad incompetente para haber decretado la ejecucion que ha motivado su demanda de amparo.

Considerando igualmente: que la ley de 20 de Enero de 1837 en que el Administrador de la Aduana funda su procedimiento, expresamente prohibe en su artículo 19 á los empleados, ingerirse en la jurisdiccion contenciosa que corresponde á los Jueces, declarando en su artículo 29, que por negocios contenciosos se entienden aquellos en que sean forzosas las actuaciones judiciales, ó en los que quepa disputa sobre la paga por la variacion de tiempo y circunstancias, y ofrezcan motivo fundado de dudas sobre la aplicacion de la ley; y prohibe en el 39, que pueda tener lugar providencia alguna coactiva, cuando el derecho del fisco no sea claro é indudable.

Considerando así mismo: que en el hecho de alegar la parte quejosa la coaccion y fuerza que dice intervinieron para hacerle otorgar el pagaré que se trata de hacer efectivo, ya debe estimarse por contencioso el negocio, supuesto que en derecho, tal escepcion es admisible y no puede resolverse sobre su validez, sino es por la autoridad judicial, previo conocimiento de causa.

En consideracion igualmente, á que habiéndose innovado el pagaré desde que se concedió al quejoso rebaja del total de los derechos de importacion por los que fué aquel otorgado, ya suspendió el fisco la accion que tenia para exigir la cantidad que por el se obligó á pagar, y por esto no deben ahora tenerse como indudables los derechos que se reclaman, supuesto que toda innovacion en cualquier documento ocasiona cuestion sobre si debe tenerse en su primitivo estado, ó en el que queda reducido despues de haberse innovado, siempre que los interesados en él no convegan en cual de dichos dos estados debe estimarse; y habiéndose innovado el documento de que se trata

como verdaderamente contencioso, está sujeta al conocimiento de los Tribunales la decision sobre los efectos legales que haya ó no producido la innovacion, y por lo mismo para dictarse la providencia que en derecho convenga, son indispensables las actuaciones judiciales, las que no caben al ejercitarse la facultad económico-coactiva.

Considerando igualmente que si bien la hacienda pública tiene un derecho indisputable para que se le satisfagan los de importacion que causen los efectos, que viniendo del extranjero descarguen en cualquier puerto de los que por la ley están habilitados para el comercio de altura, este derecho hoy no puede ser tan claro que se extime indispensable, supuestas las circunstancias que han presentádose sobre la valorizacion del monto total de los derechos que se reclaman, sobre el tiempo que se causaron, sobre los antecedentes que precedieron á la dacion del pagaré que por ellos se otorgó, y finalmente, por la innovacion que se hizo de dicho documento, á la vez que para dictarse la correspondiente resolucioa sobre dichas cuestiones, es indispensable que haya actuaciones judiciales. Y en consideracion por último, á que el fisco siempre tiene expedita su accion para exigir en juicio, de los responsables á la indemnizacion, de lo que cree se les adeuda, ya sea procediendo contra el quejoso ó contra los mismos efectos que la causen, ó con otros que sean conocidos por de aquel, en nada se perjudica porque deje de cobrarse por medio de la facultad económico-coactiva, supuesto que siempre le queda su accion viva para repetirla ante los tribunales, los que deben resolver con conocimiento de causa las reclamaciones que promueva. Por estas razones y teniendo presente la ejecutoria dada por la Suprema Corte de Justicia, que se registra á los folios 195 y 196 de la 2ª parte del Semanario Judicial, y con los fundamentos que dan los artículos 10 y 101 de la Constitucion general y la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de

TOMO IV.—PARTE II.

1869, fallo con las siguientes proposiciones: Primera: que la Justicia Federal ampara y protege á D. Miguel Carcaga, socio de la casa Carcaga y Compañía, contra la providencia del C. Administrador de la Aduana marítima, dictada en uso de la facultad económico-coactiva, para exigirse por medio de ella, á la expresada casa, la cantidad (\$84,696,10) ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos diez centavos. Segunda: sáquense dos copias de esta sentencia, una para su publicacion en el periódico oficial del Estado y la otra para remitirse al Semanario Judicial. Tercera: previa notificacion de esta sentencia, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision. El Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia.—*Pedro S. Bermúdez.*—*A.*—*Antonio C. Iturrías.*—*A.*—*Aurelio Padilla.*

Es copia. Mazatlan, Enero 17 de 1873.—*Pedro S. Bermúdez.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia*

México, Mayo 12 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Miguel Carcaga, socio gerente de la casa Carcaga y Compañía del comercio de Mazatlan, contra el procedimiento del administrador de la Aduana Marítima de ese puerto que dispuso embargar dicha casa, para que tuviese lugar el pago de derechos de importacion de varios efectos, con cuyo procedimiento considera el quejoso vulneradas las garantías á que se refieren los artículos 8º y 16º de la Constitucion federal.

Considerando, en cuanto á la violacion supuesta del art. 8º de la Constitucion federal:—1º. Que ese art. se refiere únicamente á las peticiones que se hagan respetuosamente y por escrito, y no consta que fuera

de esa clase la que dirijieron los quejosos al Administrador.—2º: Que aun cuando la peticion hubiera sido de esa clase, como por una parte el proveido muy bien hubiera podido no ser de conformidad, sin que por esto se entendiera violada ninguna garantía; y como por otra, ya en este juicio aparece copia de los documentos requeridos que no ha sido objetada por nadie y de la que pueden sacar los interesados todas las copias simples ó autorizadas que necesiten, su reclamacion actual no puede tener objeto alguno serio, como lo tendria acaso en el juicio de responsabilidad y daños y perjuicios.

Considerando, en cuando al art. 16º de la misma Constitucion que se dice violado en el caso, por el ejercicio de la facultad economico-coactiva:—1º: Que segun el informe del Administrador, los Sres. Carcaga y Cª son los dueños de las mercancías por las que se les exigen los derechos respectivos; y que las expresadas mercancías pararon en su poder.—2º Que los mismos Sres Carcaga y Cª en su escrito de demanda, confiesan ser los consignatarios de mercancías traídas por el vapor «Montana» fondeado en este Puerto el 23 de Noviembre de 1871, cuyos derechos de importacion valian \$482.44 centavos cuatrocientos ochenta y dos pesos, cuarenta y cuatro centavos.—3º: Que en el mismo escrito, la expresada casa se confiesa consignataria de mercancías traídas por el vapor «Constitution» fondeado en aquel puerto el 8 de Diciembre de 1871, cuyos derechos de importacion valian \$118.23 centavos, ciento diez y ocho pesos veintitres centavos.—4º: Que por el cotejo y comparacion de diversos lugares del mismo escrito de demanda, la expresada casa confiesa haber sido originariamente la consignataria del cargamento traído por el Bergantin Goleta «Wihlelmine» que fondeó en aquel puerto el 22 de Enero de 1872, y cuyos derechos de importacion ascendian á \$84.676.10 centavos, ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos, diez centavos; aunque aseguran, sin presentar compro-

bante alguno, haber renunciado esa consignacion antes de haber contraído ninguna responsabilidad fiscal; haber aceptado tal consignacion el capitan del mismo buque, lo que terminantemente prohíbe nuestra legislacion fiscal; y que solo mas tarde, cuando la casa se creyó libre de toda responsabilidad fiscal, fué cuando admitió la consignacion de las mercancías correspondientes á las propias consignaciones (del «Wihlelmine») en la parte que aun quedaba pendiente su realizacion.—5º Que por haberse efectuado esas importaciones del «Montana» «Constitution» y «Wihlelmine» á la sazón que los revoltosos dominaban el Puerto, las mercancías introducidas no se habian examinado conforme á las leyes fiscales de la República.—6º Que por el Arancel de Aduanas Marítimas y fronterizas y las demás leyes y circulares que le sirven de reglamento, todas las mercancías extranjeras que se introduzcan á la República, tienen que manifestarse y pagar las cuotas que él establece ó de lo contrario se reputan contrabando y se incurre en las penas relativas; siendo los responsables por las cuotas ó por el contrabando, los consignatarios, importadores, dueños, compradores ó conductores de las mercancías, y estando siempre afectas á esa responsabilidad las mercancías mismas, mientras pueda probarse su identidad y procedencia.—7º Que en consecuencia, es legítimo y claro el derecho con que el Administrador de la Aduana de Mazatlan exige el pago de esos derechos á los Señores Carcaga y compañía; aun admitiendo que el pagaré de plazo cumplido firmado por la casa por el monto de esos derechos, tenga todos los defectos que se le objetan; y aun cuando tal pagaré no existiera.—8º Que esa legitimidad y claridad con que la autoridad exige un pago, es todo lo que se requiere para el ejercicio de la facultad economico-coactiva conforme al artículo 3º de la ley de 20 de Enero de 1837.—9º: Que las escepciones opuestas contra el cobro, no destruyen, antes bien suponen y confirman, el derecho del Go-

bierno, y por lo mismo, aun cuando ellas sean de estimarse en el juicio respectivo, no pueden estorbar el ejercicio de la facultad económico-coactiva, hasta dejar asegurada á la Hacienda pública, segun el artículo 189 de la ley de 20 de Enero de 1837, antes citada.

Por las razones y fundamentos expuestos, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada, respecto de este juicio el 14 de Enero último por el Juez de Distrito de Sinaloa, que declara: que la Justicia federal ampara y protege á D. Miguel Careaga, socio de la casa Careaga y compañía, contra la providencia del ciudadano Administrador de la Aduana Marítima, dictada en uso de la facultad económico-coactiva, para exigir por medio de ella á la expresada casa la cantidad de ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos diez centavos; y se declara: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Miguel Careaga, socio gerente de la casa Careaga y compañía, contra el mencionado acto del Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlan.—Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron, con escepcion de un solo voto en contra, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 4 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. J. de la Quintana y Compañía, contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana marítima de Mazatlan, que le exige por medio de la facultad económico-coactiva, el pago de derechos causados por la introduccion á este Puerto de mercancías extrangeras, por violacion de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Los Sres. J. de la Quintana y Compañía, se han presentado ante U. solicitando amparo contra los procedimientos del C. Administrador de esta Aduana marítima, que les exige, en ejercicio de la facultad económico-coactiva, el pago del treinta y tres por ciento de los derechos que enteraron á los sublevados de este Puerto, por las importaciones, y en las fechas que se determinan en el escrito relativo. La peticion se ha hecho por creerse violadas con los procedimientos administrativos, las garantías que conceden el artículo 16 y la parte final del 89 de la Constitucion general de la República. El primero de estos artículos, dice testualmente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". Es así que en el presente caso se ha procedido contra los Sres. J. de la Quintana y Compañía por el Administrador de la Aduana marítima, con total sujecion á las prescripciones del artículo antes citado; luego siendo como es el Administrador de la Aduana, la autoridad competente en virtud de la ley de 11 de Diciembre de 1871, que declaró vigente las de 20 de Enero de 1837 y de 20 de Noviem-